Relaciones entre España y Guinea Ecuatorial: Anatomía de un desencuentro permanente

DONATO NDONGO-BIDYOGO

Me permitirán iniciar esta intervención con un par de precisiones. La primera, que trataré de rehuir el nivel teórico para exponer los hechos concretos y las reflexiones que susciten de una manera directa, con el fin de que sean comprensibles dentro de su lógica complejidad. Para un guineano preocupado por su país, el tema de Guinea Ecuatorial —una de cuyas parcelas prioritarias es la de las relaciones con España, nuestra antigua potencia colonizadora, de la que hemos heredado una parte de nuestra identidad nacional, como es la lengua y la cultura— no puede ser reducido al solo ejercicio intelectual, sino que suscita una variada gama de emociones, ya que se trata de nuestro país, de nuestra tierra, y sus habitantes no son un mero dato estadístico, sino que se trata de nuestros familiares y amigos, es decir, todo nuestro mundo, sobre el que van proyectados todos nuestros horizontes vitales. La segunda precisión es que no pertenezco a ningún partido político, ni en Guinea Ecuatorial ni en España, por lo que las opiniones aquí expresadas pertenecen a una persona tan celosa de su independencia personal que desde hace décadas ha asumido todas las consecuencias de esa autonomía intelectual, incluida la soledad, con la finalidad de mantener en todo momento la ecuanimidad, en la medida de lo posible, aun a riesgo de la orfandad que puede suscitar la incompreensión.

Lo que voy a exponer es, pues, el fruto de una experiencia personal alimentada, ciertamente, por la observación desde atalayas privilegiadas: durante bastantes años hice información internacional y diplomática para *Diario 16*; luego fui director adjunto del Colegio Mayor Nuestra Señora de África de Madrid, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores; durante siete años trabajé dentro de la estructura de la Cooperación Española

como director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo; y, por último, durante otros tres años, fui delegado de la Agencia Efe en Guinea Ecuatorial y en Gabón, con jurisdicción informativa en otros países vecinos, además de haber realizado las investigaciones sobre la historia de mi país como soporte de alguno de mis libros y de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas. Todo lo cual me ha permitido conocer de primera mano no sólo una serie de datos que en mayor o menor medida están al alcance de la opinión pública, sino, sobre todo, una serie de mecanismos políticos y de reflejos psicológicos que condicionan históricamente, desde hace ya 29 años, las relaciones de ambos países, hasta configurar ese territorio de desencuentro permanente que trataremos de describir.

Cuando se habla de Guinea Ecuatorial, hay que tener en cuenta que se trataba de una colonia, doblegada bajo una doble opresión, la consustancial al hecho colonial mismo y la añadida por la naturaleza del régimen imperante en nuestra metrópoli: la dictadura del general Franco. Muchos españoles no entienden que el guineano sea anticolonialista, y desde Carrero Blanco hasta ahora mismo, el discurso español está varado en la autocomplacencia de la estadística: la renta per cápita de la Guinea de los años 60 era, efectivamente, la más alta del África subsahariana, si exceptuamos Sudáfrica; los niveles de escolarización eran envidiables, en comparación con nuestros vecinos geográficos, y notables la infraestructura sanitaria, la red de carreteras asfaltadas, la belleza de la arquitectura colonial de ciudades como Bata o Santa Isabel, hoy Malabo. Y aquí se produce el primer elemento de desencuentro. En efecto, todo esto es cierto, pero, visto y, sobre todo, vivido desde el otro lado, desde el lado del colonizado, el colonialismo encerraba otra serie de realidades: el racismo, atenuado o inconsciente, pero racismo al fin; la despersonificación del nativo, al que se despojó de su cultura original y genuina para imponerle otra, conceptuada como «superior», con todo lo que ello significa, puesto que a partir del momento en que se asume la lengua, la religión y hasta las costumbres y los alimentos foráneos, el individuo se convierte en simple apéndice «del otro»; la explotación de los recursos económicos del propio país y de sus recursos humanos por los extranjeros, principales beneficiarios de la situación colonial, genera una reacción de rebeldía, al sentirse expoliados y vejados por personas venidas de otros mundos. Es necesario insistir en que, pese a toda la retórica a que nos acostumbró el régimen colonial, el colonialismo no fue altruista, aunque los nativos se beneficiasen de algunas de sus aportaciones esenciales. Dicho de manera sencilla: ¿a quién le gusta vivir permanentemente en una cárcel, por muy cómoda que sea? Hay que entender que el colonialismo en general —y el franquista en particular— era un atentado contra la esencia misma del

ser humano, que es la libertad; de ahí que sea lógico el deseo de disponer de la propia vida, y en ese sentido la rebelión colonial estaba plenamente justificada y completamente natural la exigencia de la independencia.

De manera que aquí nos encontramos con una doble patología: la neurosis obsesiva de los españoles por que se les reconozca la «bondad» de su régimen colonial choca frontalmente con la neurosis obsesiva de los dirigentes guineanos de que se les garantice su libertad y su soberanía, y hasta que no se produzca una catarsis en ambos campos, un doble ejercicio de madurez, siempre serán tensas las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España. Para que desaparezca ese primer elemento distorsionador, es necesario, pues, que los españoles superen su complejo de colonizadores, su complejo de superioridad de blancos que están en país de negros; y es necesario a su vez que los guineanos superemos nuestros complejos de colonizados, nuestro complejo de inferioridad de negros que supuestamente siempre son engañados por los blancos, de africanos que son siempre explotados por los europeos, de seres siempre a la defensiva, incapaces de articular un pensamiento nuevo y positivo superador del trauma colonial. Ello significa relegar el colonialismo a su verdadera dimensión actual como fenómeno histórico, y no un permanente referente político y social que nos impida formular proposiciones de progreso. Dicho de otro modo, es necesario que se establezcan entre españoles y guineanos relaciones de igual a igual, con lo que conlleva de asunción de las propias responsabilidades.

Las relaciones entre España y su única ex colonia en el África negra nacieron, pues, viciadas desde un principio. Nuestro primer presidente, Francisco Macías, estaba claramente afectado por la paranoia, por esa neurosis obsesiva de la que acabamos de hablar, como demuestran sus intervenciones ya durante la conferencia Constitucional —a la que asistieron personalidades luego tan relevantes en la historia actual de España y tan distintas como Fernando Morán y Rodolfo Martín Villa—, y el hecho de que España permitiera su candidatura a la presidencia (que legalmente podía haber impedido) y soportara su elección permite diversas lecturas: ¿no será que de esa manera el ministro Subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, del que dependían orgánicamente los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, «castigaba» a los guineanos por su osadía al exigir la independencia, creyendo poder instaurar después un régimen mejor controlado a través de su candidato Bonifacio Ondo Edú? ¿No será que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, creyera que de esa manera su favorito, Atanasio Ndong Miyone, se haría más fácilmente con el poder, una vez demostrada la incapacidad de Macías? No vamos a entrar en la cuestión de si fue o no apoyado por algún miembro del Go-

bierno español, como se ha especulado, pero lo cierto es que a los cuatro meses y medio de la independencia, Atanasio Ndong realizó una intentona golpista —el único intento de golpe de Estado real que ha tenido lugar en el país, aparte del victorioso de Obiang Nguema contra su tío Macías en agosto de 1979— hecho que culmina la primera crisis de las relaciones hispano-guineanas y constituye el inicio cronológico del desencuentro permanente. Porque, hasta hoy mismo, las autoridades de Malabo se niegan a dar por cerrado ese capítulo de nuestra historia, y lo utilizan como un argumento imperecedero para ilustrar la supuesta falacia que, según ellos, siempre anima a los españoles, sin tener en cuenta que el relevo generacional operado en España ha traído otras formas políticas y nuevos modos de comportamiento.

A partir de ahí, Macías no dejará pasar una sola ocasión de denunciar a la antigua potencia colonizadora como país «imperialista», «colonialista», etc., asumiendo la retórica anticolonialista más radical al uso durante los años de la guerra fría, no sólo en un afán de defender el poder, no exclusivamente por defender su vida — por algo se proclamó presidente vitalicio—, sino para defender la soberanía del país, para afirmar la independencia, que, como buen autócrata, había asociado a su poder y a su vida.

Otro de los factores que condicionó y sigue condicionando las relaciones mutuas es el convencimiento de las autoridades en plaza en Guinea Ecuatorial de que España no les quiere, que desde Madrid se preferiría a otros políticos en el poder en Malabo. Lo que les lleva, en su lógica interna, a sospechar —y a veces a expresar en voz alta esa sospecha— que España se ingiere en sus asuntos internos, minando esa confianza imprescindible para hacer fluidas las relaciones bilaterales. Tal suposición se basa en que, ya desde antes de la independencia, pero sobre todo a partir de la crisis de 1969, determinados sectores del Gobierno español y del empresariado con intereses en nuestro país no ocultaban sus simpatías por algunos políticos guineanos. Hemos hablado ya de la apuesta de Carrero por Bonifacio Ondo Edú y de la de Castiella por Atanasio Ndong. Pero estamentos económicos influyentes en la era colonial trabajaban abiertamente por la desarticulación del país fomentando la creación de grupúsculos de base tribal, el más significativo de los cuales fue la Unión Bubi, cuyo líder, Edmundo Bosió Dioko, gozó siempre de la preferencia de la poderosa Cámara Oficial Agrícola de Fernando Poo. A falta de partidos políticos en la España franquista, las llamadas «familias» de aquel régimen tan peculiar jugaron sus bazas y alimentaron las ambiciones de los guineanos más destacados, haciéndoles concebir esperanzas de hacerse con el poder. Esta situación no respondía sólo al clásico esquema del «divide y vencerás». Cada uno de los sectores con in-

tereses políticos y económicos en Guinea Ecuatorial se aprestó a librar una batalla contra los otros, con nuestro país como telón de fondo, y ese espectáculo esperpéntico fue contemplado por unos guineanos atónitos que se hubieran echado a reír de buen grado, como hicieron los franceses y otros observadores interesados, si no hubieran pagado en su propia piel tanta irresponsabilidad. Las 50.000 personas asesinadas por Macías y los cientos de cadáveres sobre los que Obiang apoya su sillón presidencial no nos permiten reír, y por eso tenemos que decir que mientras Guinea no sea un asunto de Estado consensuado por todas las fuerzas políticas españolas, ahorrándonos las imágenes de guineanos sosteniendo las campañas electorales de populares o socialistas sólo por unas migajas que apenas sirven para llegar a fin de mes, no se podrá llegar a ese territorio de encuentro necesario para basar unas relaciones estables y duraderas. La injerencia de unos y otros sólo genera la turbia ganancia a río revuelto de unos individuos que, como Antonio García-Trevijano en su día, aprovechan para apuntalar a las dictaduras que nos oprimen desde hace 29 años, so pretexto de ayudarnos.

Cuando afirmamos que no deben trasladarse a Guinea Ecuatorial las luchas partidistas españolas, estamos tratando también de conjurar otro peligro, el del enfrentamiento de unos guineanos con otros sobre temas que en principio están alejados de nuestras preocupaciones inmediatas. En mi opinión, tenemos un Estado desarticulado, que hay que ensamblar para que sirva como marco de convivencia entre todos; carecemos de infraestructuras de todo tipo, desde las educativas a las sanitarias, pasando por las obras públicas, las viviendas o los transportes; debe resolverse el tema de la moneda, y con él, el de la articulación de una economía abierta, dinámica y moderna; nuestros niños están malnutridos, las enfermedades nos diezman, la ignorancia nos ahoga; la reconciliación nacional está por hacer, y la cuestión de los antagonismos étnicos por resolver, las libertades por alcanzar; ante tantos y tan graves problemas, parece, si no superfluo, sí al menos un ejercicio de anticipación utópico el tratar de trasladar a nuestro contexto, de una forma mimética, determinados esquemas de pensamiento. Por eso, al hablar de ideologías en África, se debe hilar muy fino, pues, a pesar de la globalización, nuestras condiciones específicas requieren un tratamiento también específico. Deseamos la democracia porque han fracasado todas las experiencias de partido único, que no es sino el marco para mejor ejercer la tiranía; pero, sobre todo, porque exigimos en su momento las independencias para vivir en libertad y no para que unos pocos secuestraran nuestras mentes y nuestras energías; pero ello no significa que debamos absorberlo todo de Europa sin un análisis previo, sólo porque está de moda o nos lo imponen desde fuera.

Y con esto planteo otro de los puntos de desencuentro entre españoles y guineanos, como es la imposibilidad de entenderse si no se utiliza un mismo lenguaje. Me refiero no sólo al lenguaje político, sino a la misma lengua española. Empezando por este último aspecto, resulta claro que la deficiencia en la comprensión del español por las autoridades guineanas ha jugado un papel no despreciable en el diálogo de sordos en que se hallan enfrascados ambos interlocutores, pues no siempre entienden aquello que se les dice ni el sentido de lo que se les trata de decir. Lo cual, con ser grave, podría resolverse si existiera al menos un ambiente de mutua comprensión o una predisposición a esa comprensión, pero, en ausencia de estos elementos, todo acuerdo resulta imposible. Porque tampoco se comprende en Malabo el lenguaje político español, y ya no sólo porque no entienden el significado de las palabras, sino por su estructura mental. En general, el discurso español es un discurso modernizador, tendente a orientar a las autoridades guineanas hacia formas de Estado menos autoritarias, en las que se respeten los derechos humanos, se adecúen a los tiempos actuales las estructuras sociales, se tienda hacia la creación de una sociedad civil, a que el país remonte su ya secular crisis económica y reparta de manera más equitativa los inmensos recursos del país.

Pero en Malabo, esa orientación suena como si los españoles estuvieran poniendo las bases para apartarles del poder, del que tienen una concepción patrimonial. Ni Macías ni Obiang y sus respectivos entornos —que son básicamente el mismo— han asumido el hecho del Estado como entidad supratribal, y uno y otro han basado su acción de gobierno como si se tratara de la administración de los intereses de su tribu. Todo lo ven desde esa óptica, y no existe, por tanto, ni una verdadera Administración pública, ni un deseo de lograr el bien común. Su poder se basa en la mezcla de las concepciones tribales más anacrónicas y de las formas más depuradas de la tiranía, cuya consecuencia es que cualquiera que no pertenezca a su parentela clánica o se haya aliado a ella de una forma incondicional es en principio un «extranjero», un advenedizo del que se debe desconfiar, un enemigo, en suma. Corregir esta propensión llevará mucho tiempo no sólo en Guinea Ecuatorial, sino en muchos otros países del África negra, y sólo un nacionalismo integrador y solidario podrá iniciar la inversión del proceso. Por eso España debe profundizar más su conocimiento de lo africano, y más específicamente de lo guineano, y ayudar, desde la acción cultural, a que vayan desapareciendo los vestigios de las formas más inhumanas de las costumbres ancestrales para que la sociedad guineana alcance el estadio de la modernidad. Hasta que no llegue al poder lo que Fernando Morán suele llamar «clase modernizadora», conceptuando como tal aquellos guineanos

capaces de entender y de hablar el lenguaje actual; mientras los únicos interlocutores sigan siendo los elementos más tradicionalistas y retrógrados de nuestra sociedad, no cabe pensar en un cambio sustantivo en este terreno, ni, por tanto, en un entendimiento entre los lenguajes manejados en una y otra capital.

Por eso no debe sorprender que un ministro de Asuntos Exteriores de Obiang, Santiago Eneme, más conocido por su sobrenombre de Alandi, le preguntara al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «qué tienen que ver los derechos humanos con la democracia». Y es que, en su concepción, en su lenguaje, no tienen nada que ver. Ellos preferirían que España —y el resto de los países y organismos que cooperan con Guinea— les dieran en mano todo el dinero asignado para nuestro país por las estructuras de asistencia internacional para que vivan mejor, ellos y sólo ellos, y se hiciera la vista gorda sobre las detenciones arbitrarias y la tortura, los juicios sin garantía, el terrorismo de Estado, la falta de hospitales y escuelas, de luz eléctrica y agua corriente, etc., etc. Estos temas del bienestar general no les interesan, precisamente porque en sus aldeas no dejaron esas cosas, que consideran lujo de blancos y no necesidades esenciales que hay que cubrir para que la vida humana adquiera dignidad. Están acostumbrados a ejercer el autoritarismo y no entienden —sinceramente no comprenden— que se les diga que el poder es otra cosa. Por eso hablan siempre de injerencia externa si se lo señala un extranjero, o de «malos guineanos» si quien se queja es un nativo. En Guinea Ecuatorial —como en otros países de nuestro continente— hace falta, pues, que el Estado se dote de contenido, que asuma sus funciones y no sea regido por una minoría que simple y llanamente ha trasladado a toda la nación las estructuras de su propia tribu.

Lo cual nos lleva a proponer que España realice una política para el pueblo guineano, y no sólo para los dirigentes guineanos, sean quienes sean, ahora o en el futuro. Sé que es difícil, pues las relaciones se establecen y se mantienen de Estado a Estado, pero, sobre todo en lo cultural, estoy seguro de que existen mecanismos que permitirían mantener abiertas las puertas de un diálogo franco y enriquecedor entre nuestros dos pueblos. Lo que pasa es que muchas veces falta la audacia necesaria y sobra el miedo, a veces disfrazado de prudencia.

Miedo o prudencia, el caso es que España ha tenido que soportar en estos casi tres lustros numerosos casos de humillaciones por parte de los gobiernos guineanos. Tanto en la época de Macías como en la actual de Obiang, el gobierno de Malabo ha organizado manifestaciones multitudinarias en las que el pueblo ha sido obligado a arremeter contra la representa-

ción española, con gritos, consignas y pancartas claramente insultantes. Declaraciones de Macías o de Obiang, o de prohombres de sus gobiernos, han quedado muchas veces sin reacción, sin ninguna respuesta de la parte española. Vejaciones de palabra contra las más altas instituciones del Estado español han sido silenciadas a la opinión pública española. Soflamas, más que discursos, han sido lanzadas contra sus autoridades, sin mayor trascendencia. Ciudadanos españoles —blancos y negros— han sido encarcelados y torturados, sin recibir muchas veces más apoyo de la Embajada española en Malabo que el moral. La valija diplomática de la Embajada de España ha sido violada en varias ocasiones, y aparentemente no ha pasado nada.

Pues bien: esa aparente pasividad del gobierno español ha llevado a las autoridades guineanas a la certidumbre de que España no tiene fuerza, de que lo consiente todo, de que se puede jugar con ella sin que pase absolutamente nada. Y desde la mentalidad tribalista, la prudencia se confunde con la cobardía, y los cobardes no merecen sino desprecio. Por eso se han echado de menos reacciones contundentes, gestos más enfáticos que sirvieran para establecer el respeto que se merece un país como España. Las mentalidades primitivas no conocen más ley que la fuerza, y de vez en cuando es necesaria la firmeza para establecer el equilibrio. A cualquier observador le resulta imposible imaginar a un gobernante gabonés o camerunés insultando a las autoridades francesas, porque las consecuencias no se harían esperar. Y hasta que España no se haga respetar por los guineanos, siempre parecerá que quien dicta el ritmo, la intensidad y la cadencia de las relaciones es Guinea Ecuatorial, lo que constituye una paradoja que comparte el resto de la comunidad diplomática de Malabo, que no entiende el papel de España en su ex colonia. Como vía de ejemplo, podemos decir que la reacción proporcionada que se produjo tras la expulsión del cónsul español en Bata en diciembre de 1993, que se tradujo en la drástica reducción de la cooperación, y que verdaderamente asustó a las autoridades de Malabo, fue seguida por el inicio de unas conversaciones secretas —secretas a voces, como acostumbra los españoles a tratar sus asuntos— en las que la Embajada de España, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pareció renunciar a su hasta entonces postura de firmeza en su apoyo a la democratización del régimen de Obiang. Y en seguida vino la contrarreacción de Obiang intensificando la represión y arremetiendo contra uno de los principales dirigentes de la oposición como lo es Severo Moto, con el que se escenificó un juicio de opereta que todavía recordamos todos, hasta desembocar en la languidez actual de las relaciones bilaterales, en las que la escalada ha llegado a su punto culminante, la supresión del último vestigio de la presencia española en Guinea Ecuatorial, del principal vínculo entre ambos pueblos, co-

mo lo es la lengua española. ¿Qué concederá España ahora a Obiang Nguema, quien, al fin y al cabo, logrará su objetivo como ha logrado todos los anteriores? Recuérdese, a este respecto, tan sólo la incorporación de Guinea Ecuatorial al área económica y monetaria del franco francés en 1985, cuya posibilidad era negada sólo dos años antes por altos funcionarios de Exteriores, quienes, ante un artículo mío sobre el tema, me acusaron de alarmista y desestabilizador. Por desgracia para mi país, en ese y otros temas se reconoce ahora que uno tenía razón.

La cooperación española con Guinea Ecuatorial, tan generosa como anárquica, está mal planteada desde sus inicios. A la primera etapa, ciertamente de emergencia pero que duró nada menos que seis años, siguió un intento de racionalización desde 1985, con la elaboración del I Plan Marco. Pero la realidad es que los guineanos, y no sólo las autoridades, perciben esa cooperación como algo que no les afecta, y tienen razón. Primero, porque está concebida, administrada y ejecutada exclusivamente por los españoles, sin apenas participación de los sujetos a los que se supone va dirigida tal asistencia. Segundo, porque beneficia casi más a los técnicos y funcionarios españoles que al pueblo guineano, porque bastante más de la mitad de su presupuesto está destinada a la propia infraestructura de la cooperación y a los sueldos de los cooperantes. Tercero, porque apenas tiene incidencia en la población supuestamente asistida, puesto que sus beneficios apenas se notan en el país, si exceptuamos el campo de la enseñanza y, de lejos, el de la sanidad. Cuarto, porque la asistencia técnica española se ha convertido en un arma política, y la gente de un poblado alejado de la capital, que ni sabe ni quiere saber de política, no entiende por qué se les quitó al único médico que quizás habían visto en su vida. Podríamos seguir así bastante rato, desgranando los argumentos que han supuesto que una iniciativa en sí loable, que les ha costado a los españoles al menos 25.000 millones de pesetas desde que Obiang subió al poder, se haya difuminado sin dejar más huella que un profundo sentimiento de abandono y de frustración.

En mi opinión, España debió basar su cooperación en los miles de profesionales guineanos —o bien hispano-guineanos— que han estudiado y viven en su territorio, que tienen la ventaja añadida de conocer su país de origen, sus lenguas vernáculas, su mentalidad; y que hubieran dejado el fruto de su trabajo en su propio país, creando de verdad riqueza e impidiendo que buena parte del dinero donado retornara a España por la vía de los fabulosos sueldos de los expatriados. Esos mismos profesionales son, además, la clase modernizadora en la que debiera apoyarse España para que su acción sea permanente y próspera en Guinea Ecuatorial. En segundo lugar, España

debió primar su asistencia en la creación de infraestructuras, y no en servicios que, como se demuestra ahora, son sólo pan para hoy y hambre para mañana. En tercer lugar, España no identificó suficientemente las necesidades del país ni consultó apenas con los guineanos, y, como el resto de los países y organismos internacionales donantes, prefirió el prestigio inmediato y la propaganda a las realizaciones concretas. En este capítulo sólo podemos exceptuar a Francia, que sí se guardó para sí los proyectos más productivos, que iba abandonando España, como los económicos, y el resultado es que las telecomunicaciones, el comercio y la energía —además del sistema financiero y otros sectores de producción— están controlados por los franceses. Y, en último lugar, España prometió —es decir, reflejó sobre el papel— más de lo que podía o quería cumplir.

Si repasamos los acuerdos firmados a partir de 1979 y el Tratado de Amistad y Cooperación de 1980, veremos que España comprometió su asistencia en materia de pesca, hidrocarburos, capacitación y extensión agraria, transportes marítimos, finanzas, transporte aéreo, minería, telecomunicaciones, formación profesional, educación y becas de estudio, cultura, defensa y seguridad, agricultura, y otros de menor calado político. Al día de hoy, prácticamente ninguno de esos acuerdos ha dado sus frutos: los barcos pesqueros españoles no faenan en aguas guineanas; los hidrocarburos son explotados por empresas estadounidenses; la extensión agraria se limitó durante un tiempo a la explotación de dos granjas que suministraban huevos y verduras a los cooperantes y diplomáticos españoles, granjas hoy abandonadas; los transportes marítimos y aéreos no existen; las finanzas, las telecomunicaciones y la energía están controladas por Francia; hace años que España abandonó las prospecciones mineras; la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad también ha pasado a manos francesas, así como los temas de defensa; Malabo y Bata siguen sin agua corriente o luz eléctrica; aún no existe un centro cultural en la región continental, y el de Malabo languidece día a día; y, por último, desde 1994 España ha dejado de influir en la enseñanza en Guinea Ecuatorial.

Reflexión aparte merece el tema de la ausencia de instituciones financieras que respalden las posibles inversiones españolas en nuestro país, lo que nos lleva al caso del Guinextebank, un banco mixto creado en el marco de la cooperación financiera, operado al 50 por 100 entre el Banco Exterior de España y el Estado guineano. Se ha escrito mucho sobre su quiebra, ocurrida en 1987, y se ha insistido en los abusos cometidos por los guineanos, y en particular por Obiang y sus familiares, que recibieron créditos multimillonarios sin presentar ninguna garantía y que, como era de esperar, no devolvieron. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que los directores de

las dos sucursales de aquel banco en Malabo y Bata eran españoles, unos funcionarios de banca que se olvidaron de hacer bien su trabajo sólo porque estaban en el trópico, y se engarzaron tan bien en la estructura de la corrupción que reina en Guinea que no dudaron en realizar operaciones al menos irregulares, si no rayando la ilegalidad, para complacer a sus amigos, no todos los cuales eran guineanos, incluido alguno hoy muy conocido en España, y muy particularmente en esta ciudad de Valencia. De modo que, como el capital, la responsabilidad del fracaso del Banco Exterior de Guinea Ecuatorial y de España debe repartirse al 50 por 100, aunque, por desgracia, siempre paguen al final los mismos, los contribuyentes españoles, puesto que el fabuloso agujero que generó gestión tan alegre fue cubierto por aquel banco público español, y en última instancia por el Estado español. Lo que, en buena lógica, nos lleva a afirmar que no es que sea imposible realizar negocios prósperos en Guinea Ecuatorial, sino que deben primar allí los mismos criterios de honestidad, eficacia y rentabilidad que en España garantizan el éxito de una empresa. Por supuesto, el vacío dejado por el banco hispano-guineano fue inmediatamente ocupado por un banco de la órbita francesa.

La última reunión de la Comisión Mixta Guineo-Española, prevista en el Tratado de Amistad y Cooperación, se produjo en 1989, el mismo año, curiosamente, en que Obiang realizó su última visita oficial a Madrid. El primer Plan Marco, que se ejecutó entre 1986 y 1990, no puede decirse que fuera satisfactorio, por las razones ya expuestas, y a la vista están sus resultados. Es posible que si se manejan exclusivamente los documentos producidos por Cooperación Española, se tenga la impresión de que se cumplieron prácticamente todos sus objetivos, hasta en un 80 por 100, según se refleja en ellos; pero el contraste de esos datos optimistas con la realidad sobre el terreno nos lleva, en el mejor de los casos y para no cargar las tintas, a un cierto grado de escepticismo. El II Plan Marco, aprobado en 1990 y que debía desarrollarse hasta 1995, quedó interrumpido dos años antes por la expulsión del cónsul español en Bata, Diego Sánchez Bustamante.

El fracaso de la cooperación española en Guinea Ecuatorial no puede atribuirse en exclusiva a la parte española; pero tampoco podemos descargar todas las culpas sobre Guinea Ecuatorial. El gobierno de Malabo tiene razón cuando se queja de que esa cooperación ha beneficiado principalmente a los propios españoles, que la gestionan en su integridad. Pero lo que pasa es que carece de la autoridad moral para levantar banderas de honestidad y de eficacia un régimen que, en 18 años de poder absoluto, no ha hecho absolutamente nada por mejorar el nivel de vida de su población, que se deteriora día a día. Con sus 400.000 habitantes, la mitad aproximadamente de

los cuales malvivimos fuera, en Gabón, en Camerún, en Nigeria, en España y en otros países a lo ancho del mundo, Guinea Ecuatorial es el país que más cooperación recibe por habitante. Además de España, cooperan o han cooperado con Guinea Ecuatorial Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Nigeria, Sudáfrica (antes de Mandela), China, Corea del Norte, Cuba y Argentina. Todo el sistema de Naciones Unidas tiene representación en Malabo, coordinado por el PNUD, desde la UNICEF al PMA, pasando por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Además de infinidad de ONGs y congregaciones y agrupaciones religiosas de todo tipo, católicas y no católicas. Tan ingente cantidad de recursos humanos y económicos no ha conseguido sacar al país de la miseria, y la situación, como decíamos antes, se deteriora un poco más cada día. ¿Por qué?

La respuesta es compleja, y no podemos dar aquí la fórmula mágica que resuelva nuestros problemas. Doctores tiene la Iglesia. Pero lo que sí es cierto es que habrá que hacer algo más que mirar cómo muere la gente en un país con inmensos recursos; cómo sus autoridades oprimen y maltratan a una población que jamás ha conocido la libertad, pues dejamos de ser una colonia franquista para caer en la tiranía de Macías, a la que siguió y sigue el despotismo de Obiang.

Antes de terminar, me gustaría tocar brevemente un aspecto que considero importante. Resulta que, pese a los viajes de los Reyes a diversos países de nuestro continente, la presencia de España es mínima en África. Incluso tiene abandonados a miles de africanos que en Camerún, Costa de Marfil, Senegal, República Democrática de Congo, Gabón, Angola y otros países, que aprenden el español como segunda lengua en la secundaria y en la universidad sin material didáctico, etc. En mi opinión, deberían potenciarse las relaciones culturales con estos países, independientemente de lo que suceda con Guinea Ecuatorial; la acción exterior de España no puede estar eternamente hipotecada o condicionada por sus relaciones, buenas o malas, con el gobierno de Malabo. Merecería la pena pensar en esto y emprender una acción específica que consolide y amplíe la presencia de la lengua española en nuestro continente. No hablo a humo de paja: muchos miles de africanos lo demandan, y un país como España ni puede ni debe desatender esa demanda.

La conclusión que podemos sacar de estas reflexiones es, a mi entender, que España debería buscar los mecanismos para conocer y comprender mejor a los guineanos, y no cerrarse en banda ante los desplantes de las autoridades de Malabo. Su cooperación debe concebirse a largo plazo, y no contentarse con ir gestionando el día a día, limitándose a ir tapando las grietas que se producen en el edificio de sus relaciones con su antigua colonia. Gui-

nea Ecuatorial no está formada únicamente por el gobernante de turno y su familia. Es todo un pueblo celoso de su independencia, pero que se siente orgulloso de sus vínculos hispánicos, que conforman una parte sustancial de nuestra identidad como pueblo y como Estado. España —es decir, todos y cada uno de los españoles que tengan que ver con Guinea Ecuatorial— debe dejar de actuar con una mezcla de paternalismo y mala conciencia y respetar escrupulosamente nuestra soberanía, absteniéndose de dictarnos lo que debemos hacer, sea a los que mandan o a los que luchan contra los que mandan. Y debe tratar a los guineanos como seres adultos, sin disculpar la mala fe con una comprensión mal entendida.

Y Guinea debe asumir su independencia con todas las consecuencias. Y no esperar que España y el resto de la comunidad internacional nos resuelvan todos nuestros problemas, e incluso nuestros caprichos, como si fuera una obligación. Cooperar es un verbo de doble dirección, y hasta ahora las autoridades guineanas actúan como los adolescentes, que pretenden afirmar su personalidad mientras esperan que todo les sea dado por los padres. Hace falta que la madurez, que la edad de la razón, lleguen a Malabo, y sólo entonces podrán articularse unas relaciones fructíferas y estables, lejos de los complejos de todo tipo que subyacen en las actuaciones de los unos y de los otros.